

EDITORIALES

El ébola interroga

La denuncia judicial de 15 médicos de La Paz por la gestión del contagio de Teresa Romero recuerda que el mal continúa representando una amenaza

Hace ahora un mes, Teresa Romero comenzó a sentir las primeras décimas de fiebre que acabaron desembocando, una semana más tarde, en su caótico ingreso hospitalario y su diagnóstico como la primera persona en haber contraído el ébola en España y, por extensión, en Europa. El hecho feliz de que la auxiliar de enfermería haya logrado sobrevivir al virus, tras días de lucha angustiosa contra sus letales efectos, ha tranquilizado a una ciudadanía que asistía entre conmovida, preocupada e indignada a un contagio dentro de sus propias fronteras que las autoridades sanitarias habían dado poco menos que por imposible, fiando ese pronóstico a unos protocolos aplicados sin el obligado y suficiente rigor. Resulta comprensible que la inquietud social se haya relajado al compás de la recuperación de Teresa Romero, de la salvaguarda de todos aquellos que estuvieron en contacto con ella cuando aún no le había sido diagnosticada la enfermedad y de las informaciones que apuntan a una moderación de la extensión del contagio en los países africanos más expuestos y vulnerables al virus. Pero la denuncia formalizada ante los juzgados madrileños por 15 facultativos del Servicio de Medicina Intensiva de La Paz contra su hospital, que desata la batalla legal en torno a la prevención y gestión del ébola, recuerda que el mal continúa siendo una amenaza real, y no solo porque los medios desplegados por la comunidad internacional para tratar de frenarlo en su origen -África- distan de ser aún verdaderamente solidarios y efectivos. Y la demanda también subraya, al menos como hipótesis para la investigación judicial, las lagunas, insuficiencias y potenciales errores que rodearon no ya la asistencia al misionero repatriado con cuyo contacto acabó contagiándose Romero, sino la reacción y atención ofrecidas antes y durante el ingreso de la auxiliar de enfermería, cuando se habían encendido todas las luces de alarma. El recurso a los tribunales interroga, en primera instancia, sobre la incapacidad de la Administración sanitaria para responder con garantías al desafío planteado. Y avisa del riesgo potencial de bajar la guardia ante una enfermedad que también empieza a exigir de los responsables públicos un reconocimiento expreso de los profesionales, que cargan injustamente con el estigma social de la sospecha y la ignorancia tras haberse jugado la vida para curar el mal.

Doble conflicto israelí

La decisión del nuevo Gobierno sueco de reconocer oficialmente a Palestina como un Estado ha causado una honda impresión en Israel. Es una iniciativa de calado porque Suecia es un país de la Unión Europea y porque podría convertirse en el primer país de relevancia en dar un paso que otros darán, sin duda, antes o después. Los legislativos de Gran Bretaña e Irlanda han pedido ya a sus ejecutivos que consideren tal reconocimiento. Estas iniciativas, que cuentan con un extendido respaldo social en el mundo entero, coinciden con una inquietante vuelta a la violencia en el corazón simbólico y físico del conflicto: Jerusalén-este, ocupada por Israel en 1967, una ocupación tenida por ilegal y no reconocida por la ONU y la comunidad internacional. Varios muertos y una tensión creciente acompañan a un discurso inusualmente duro del Ejecutivo israelí. El primer ministro Netanyahu dice que no devolverá la parte ocupada y que lo hace «porque su obligación es defender al Estado judío». Pero es dudoso que rehusar la negociación, optar por la fuerza e indisponerse con buena parte de la diplomacia mundial sea la mejor manera de cumplir con ese deber. Israel se encamina hacia un choque de trenes con Washington, su paciente aliado. Probablemente, lo más contraproducente que un líder israelí puede hacer si de verdad se siente preocupado por la seguridad de su propio Estado.

EL DIARIO VASCO

DECANO DE LA PRENSA GIPUZCOANA

Director
José Gabriel Mujika

Subdirector:
Alberto Artigas
Jefes de Redacción:
Lourdes Pérez y
Antxon Blanco

Jefe de Edición y Cierre
Sebastián Valencia
Jefes de Área y Redactores jefes
Iñigo Beltrán de Heredia,
Julián Cobos, Olatz Elozegi,
Mitzel Ezquiaga, Mario García,
Javier Peña, Javier Roldán,
Pedro Soroeta e Iñigo Urutia

Edita:
Sociedad Vascongada de
Publicaciones, S.A.

Depósito Legal:
SS-18/1958

Tirada controlada por OJD

Un Parlamento amordazado

JOKIN BILDARRATZ
SENADOR DE EAJ-PNV

El PP mantiene una incomprensible estrategia dilatoria y en lugar de afrontar los problemas, los aplaza con la inútil pretensión de que se resuelvan solos

Algo grave pasa en un sistema democrático cuando un presidente de Gobierno, y responsable máximo del Partido Popular, se ve en la obligación de utilizar en su propio interés una comparecencia en el Senado para ofrecer, a modo de explosión controlada, una reacción que calme a la opinión pública y a la publicada ante los numerosos casos de corrupción que le rodean. El presidente español, Mariano Rajoy, sabía el pasado martes que estaba utilizando un burdo juego maniqueo, violentando los usos y costumbres de la Cámara Alta pero lo hizo. En una sesión de control al Gobierno, se valió de una pregunta sobre la pobreza para, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, realizar una declaración que nada tenía que ver con el asunto tratado. Se valió de la situación para solicitar una disculpa verbal, a sabiendas de que no había posibilidad de réplica ni pregunta alguna.

El único objetivo de Rajoy era salir ante los medios de comunicación a decir algo, pero asegurándose a su vez de que nadie pudiera objetarle nada. No es la primera vez que lo hace. El presidente del Gobierno español y del PP se oculta tras el burladero, o tras la pantalla de plasma, y solo salta a la arena cuando cuenta con todas las ventajas y garantías de su mayoría absoluta. Es la 'actitud Rajoy': se escuda en su mayoría parlamentaria para eludir el debate social. Pero la sociedad pide más, especialmente tras una semana en la que Ángel Acebes, secretario general del Partido Popular nombrado por el propio Rajoy, ha sido imputado por un supuesto delito de apropiación indebida en la gestión de la 'caja B' de la formación conservadora.

La víspera de esta comparecencia, todos los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados habían pedido un Pleno especial para debatir una serie de medidas contra la corrupción. Lo habíamos hecho donde corresponde. La respuesta del PP no se hizo esperar y fue la esperada: No. Una rotunda negativa bajo el pobre argumento de que lo único que la oposición quería era criticar al Gobierno. Al 'día siguiente', Rajoy utilizó para su muy medida disculpa por la corrupción la misma Cámara en la que el 'día anterior' se había negado a adoptar medidas contra la corrupción. Es evidente que algo falla en el parlamentarismo español.

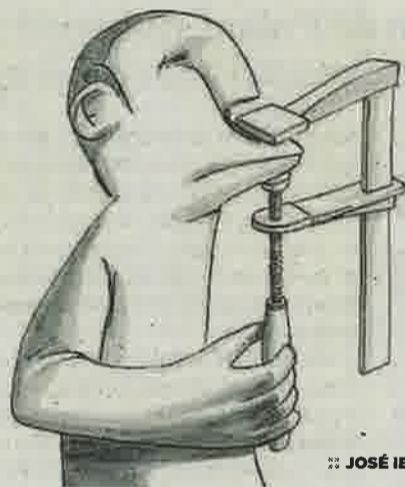
Algo falla en un sistema democrático en el que todas las fuerzas del arco parlamentario están de acuerdo en la necesidad imperiosa de reformar la Constitución, adecuar y actualizar un texto que está demandando respuestas diferentes ante realidades diferentes. El dinamismo de los nuevos tiempos y de las necesidades actuales lo reclaman a gritos, pero el PP lo está eludiendo sistemáticamente. Mantiene una incomprensible estrategia dilatoria y, en lugar de afrontar los problemas, los aplaza, con la inútil pretensión de que se resuelvan solos. Más 'actitud Rajoy'. Esta actitud que evita todo debate y, por lo tanto, cualquier atisbo de acuerdo, se ha aplicado, de forma inexplicable, al tema de la corrupción. Una cuestión, una lacra,

que el PP trata de eludir por todos los medios y con su batería habitual de tretas, despistes y ventiladores.

El problema es que el hedor es creciente e insoportable. El problema es que tanta corruptela no se puede ocultar. Y, así, la ciudadanía apremia medidas eficientes, porque necesita que el Parlamento se convierta en un espacio de transparencia en el que se adopten decisiones firmes y se controle su ejecución de forma clara. Es necesario, sin dilación, un proceso abierto de regeneración democrática, y el Parlamento tiene que impulsarlo, no ralentizarlo como pretende el PP de Rajoy.

Todas las medidas van a ser necesarias, a corto, medio y largo plazo: aumento de los recursos del sistema judicial, mayor número de jueces, mayor eficacia e independencia en los sistemas de control, garantía de transparencia, aumento relevante de los recursos para los Tribunales de Cuentas... No podemos continuar de la misma manera: No podemos continuar con discursos vacíos que no admiten debate público. El drama es pretender apuntalar la 'actitud Rajoy' ante una

realidad que se desmorona. Hay, en medio de este virulento rebrote de crisis de confianza que atraviesa la clase política española, una realidad incuestionable: también en esto, los vascos somos diferentes al resto del Estado. La clase política vasca (y no me refiero a unas siglas en concreto, ni siquiera a las mías, sino al conjunto del espectro político de Euskadi), posiblemente porque seamos un país pequeño, más fragmentado políticamente y en el que la ausencia de mayorías absolutas nos ha 'condenado' (bendita condena) a ese ejercicio tan



JOSE IBARROLA

sano y saludable que es el pacto y el consenso; ha interiorizado, y ha hecho suya, una forma de hacer política y de gestionar los recursos públicos que, parafraseando al presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ofrece «muchos menos resquicios y muchas menos responsabilidades para los garbanzos negros que en otros lares». Ahora bien, los políticos vascos no podemos caer en la autocomplacencia. Nadie está a salvo de la amenaza: ni EAJ-PNV, ni ningún otro partido vasco. Todos debemos mantener la guardia alta. Siempre. Debemos mantener el grado de tolerancia contra la corrupción en 'cero'. También en la lucha contra esta lacra los vascos debemos ocupar y liderar la vanguardia. Con palabras y con hechos. Solo así podremos mantener y perpetuar esta honrosa excepcionalidad vasca.

Vencer los espacios de corrupción es una exigencia ética para cualquier ciudadano y, en mayor medida, para un representante político. La ciudadanía española, también la vasca, asiste acongojada a los numerosos casos de corrupción que se descubren día sí y día también. La gente de la calle, las instituciones, los representantes políticos necesitamos abrir, y que se abra, un proceso contundente de regeneración política. Lo necesitamos todos y nos beneficia a todos. Es imprescindible recuperar la confianza. Ese camino se recorre debatiendo y tomando medidas en la arena parlamentaria, no escondiéndose tras la barrera.